

## **DESAFÍOS DE LA RESILIENCIA DEMOCRÁTICA EN ESCENARIOS DE DIVERSIDAD CULTURAL.**

**Resumen:** Partiendo de la idea de que la resiliencia democrática hace referencia a la capacidad que debe tener el régimen político para prevenir o reaccionar a los desafíos sin perder precisamente su carácter democrático. En los últimos años en escenarios de diversidad cultural en México, la manera en que se manifiesta esa resiliencia pareciera improvisada, es decir no es la misma en todos los casos. Por lo anterior, resulta importante reflexionar acerca de ¿Cuáles son los factores que favorecen que la democracia sea más resiliente en unos casos que en otros? y determinar ¿Cuáles son algunas acciones que pueden fortalecer la democracia en esos escenarios? En esta ponencia se pretende analizar la Resiliencia Democrática en escenarios de diversidad cultural en México, identificando la manera en sus componentes institucionales y conductuales intervienen en la solución de conflictos relacionados con el ejercicio del derecho a la libre determinación en materia política de los pueblos originarios de Chiapas.

**Palabras clave:** Diversidad Cultural, Resiliencia democrática, Autoadscripción calificada, Derechos Políticos. Derecho Electoral

### **I. Introducción**

En este trabajo, mediante el análisis y reflexión, se pretende un acercamiento a la conceptualización de la resiliencia democrática que en los últimos años sea manifestado en México y en lo particular algunos de sus efectos o manifestaciones en escenarios de diversidad cultural; haciendo énfasis en el tema de la autoadscripción indígena como un detonante de los desafíos políticos que podrían atenderse con resiliencia.

Se divide para su mejor comprensión en seis apartados. El primero de ellos corresponde a esta introducción, y los restantes aluden al desarrollo de la ponencia, hasta llegar a las conclusiones.

De manera específica en el apartado denominado: ¿Qué es la resiliencia democrática?; se describen los elementos de ese concepto para de esta forma identificarlos y diferenciarlos, así como también estar en condiciones de generar nuestro propio concepto y ubicarlo en el plano de la diversidad cultural.

Al abordar las diferentes manifestaciones de la resiliencia democrática en escenarios de diversidad cultural, se plantean la manera en que la resiliencia democrática puede impactar en temas trascendentales en la vida democrática de los pueblos originarios de México.

Finalmente se generan algunas conclusiones y se señalan con precisión las fuentes de información utilizadas en el documento

## **II. ¿Qué es la resiliencia democrática?**

Sin duda que al escuchar el término resiliencia, generalmente se relaciona con marcos ambientales, ecológicos y en lo particular con los desastres naturales; en efecto, la resiliencia se utiliza para describir un sistema ecológico, aunado a que es una medida de la cantidad de perturbación que el sistema puede soportar y aún así mantener la misma estructura y funciones. La resiliencia aborda la capacidad de un sistema para sobrevivir frente al cambio. Cuando el concepto se traslada al ámbito sociopolítico, adquiere un marco un tanto distinto, pero sin embargo con elementos similares.

En el caso que nos ocupa, su aplicación en la vida democrática y por ende su vinculación con el concepto de democracia, la resiliencia se refiere a la capacidad de un sistema sociopolítico democrático para hacer frente, sobrevivir y recuperarse de desafíos y de crisis complejas que representan tensiones o presiones que pueden conducir a una falla sistémica. Pero no es tan simple, ya que la democracia es un sistema complejo, con distintos estándares en todos los contextos.

Por ejemplo, resulta determinante para los órganos jurisdiccionales, identificar la resiliencia democrática como medio para restringir el poder y la discrecionalidad, así como exigir, ejercer la justicia y evitar la impunidad dentro de la gobernabilidad democrática, que se desarrolla no solo durante las elecciones, sino también después de estas, con la

responsabilidad de gobernar, mejorar y fortalecer el sistema democrático, para así acercarnos a una nueva era una gobernabilidad democrática efectiva.

En los sistemas democráticos, los formuladores de políticas, los académicos, la sociedad civil y el sector empresarial pueden ser la fuente para identificar cambios necesarios en el sistema y asegurar que se ejerza una mayor elasticidad de una manera que sea legítima y responda al sistema de gobierno democrático. El cambio y la reforma pueden ocurrir a través de reformas constitucionales. Sin embargo, es probable que los pasos incrementales a lo largo del tiempo en lugar de los cambios grandiosos produzcan resultados más óptimos para la resiliencia democrática.

### **III. Manifestaciones de la resiliencia democrática en escenarios de diversidad cultural**

Se puede afirmar que existen tantos sistemas normativos diferenciados como pueblos y comunidades coexistiendo en el territorio nacional. Los procesos que utilizan para la designación de sus autoridades revelan la cosmovisión, los saberes diversos y los valores de cada comunidad.

Dentro de los sistemas y formas de gobierno indígena se encuentran los sistemas de cargos o servicios, la organización comunitaria en barrios, los consejos de ancianos y el tequio o faena, mismo que a continuación de manera breve se describen.

En la mayor parte de las comunidades latinoamericanas que gozan de raíces prehispánicas se puede notar la práctica de los Usos y Costumbres. Estos tienen su antecedente más cercano en el sistema de cargos que son oficios religiosos ocupados con base en una rotación entre los hombres de una comunidad. (Korsbaek, 1996: 15-20).

En los sistemas de cargos, también conocidos como de servicios, las autoridades son nombradas, hoy día en la mayoría de los casos, por la asamblea. Comúnmente los cargos son obligatorios desde los dieciocho años o antes, si la persona se casa y forma así una unidad familiar independiente de la de sus padres, o después, si sale a estudiar, pues al regresar de la universidad debe ponerse a las órdenes de las autoridades y presentarse en la asamblea, quien le asignará su primer cargo.

Los cargos se desempeñan en nombre de la familia y su cumplimiento da la posibilidad a todas las personas que la integran a gozar de los derechos comunitarios. A manera de ejemplo en la región huichola, los cargos de jicareros tienen la responsabilidad de cuidar la jícara de una entidad ancestro comunal por un periodo de cinco años y asistir obligatoriamente a las fiestas grandes, que se realizan en el centro ceremonial. (Fajardo, 2010: 19-58).

En comunidades tzeltales de Chiapas el sistema de cargos recae la unidad familiar y en la complementariedad necesaria dentro de la pareja para poder realizarlos, pues no son remunerados e implican tener que dejar las otras actividades familiares y económicas para cumplirlos, todo con el fin de cumplir bien con la comunidad, tener prestigio dentro de ella, y hacer posible el funcionamiento del gobierno comunitario.

Las formas de representación de la autoridad se reconocen en el sistema de cargos: un sistema político y otro religioso. Quien acepta un cargo deja su paraje y su milpa durante un año para residir temporalmente en la cabecera municipal. Esto significará el endeudamiento para subsistir durante ese tiempo y para sufragar los gastos que le representa el cargo. (Gómez, 2004:13).

En las comunidades en que la base de la organización comunitaria son los barrios, la importancia de estos radica en la rotación que debe hacerse entre comuneros de cada uno de ellos para el cumplimiento de los cargos. Por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, existen ocho barrios, lo que implica un sistema muy complejo de alternancia entre ellos en los diversos tipos de cargos.

En otras comunidades, los barrios mantienen una estructura organizativa, donde todos tienen autoridades propias o internas; en el caso de San Pedro Tziltzacuapan de Barranco, perteneciente al municipio de Ixhuatlán de Madero, en la Huasteca media veracruzana, una comunidad tepehua, cada barrio tiene su juez, sus comités, y capitanes para organizar su propio carnaval. (Bello, 2011:4).

Los consejos de ancianos son otra institución que también influye en los sistemas de autoridades, como ocurre en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, con los denominados *acha*, quienes son gente de mayor edad, experiencia y prestigio que conforman en el contexto de la referida comunidad, un consejo comunal, compuesto siempre por una persona por barrio.

La institución indígena que recibe el nombre de tequio o faena es el trabajo colectivo realizado para el bien común, es un reflejo de valores y principios propios, que sustentan una visión colectiva de la vida y del bienestar. Es el trabajo comunal presentado como un deber de cada uno en beneficio de la comunidad actual y también de la futura. Se piensan en las mejoras como miembros de un pueblo y siempre se refieren al interés colectivo. (Cordero, 2009:43)

Con los tequios se cumplen diversos fines, en comunidades con sistemas de gobierno propio particularmente complejos, donde convergen diversos sistemas de cargos, pueden existir distintos tipos, que se pueden clasificar según la autoridad convocante: Los organizados por el cabildo o autoridad, los organizados por la autoridad a cargo del cuidado del territorio y de los recursos naturales, y los que organiza algún comité.

El sistema jurídico mexicano reconoce la libre determinación en materia política como derecho colectivo de los pueblos originarios en la ley fundamental y vincula a las entidades federativas a generar las reglas pertinentes para operativizarlo.

Pese a lo anterior, en el constitucionalismo local es muy restringida la protección que se otorga a los pueblos originarios que conviven en sus territorios, aunado a que las legislaturas de las entidades no suelen generar leyes de desarrollo constitucional que incluyan, por ejemplo, reglas relacionadas con el derecho electoral indígena o de coexistencia de este con el sistema electoral hegemónico.

La única alternativa para la defensa de ese derecho colectivo ha sido su judicialización, es decir, mediante la defensa jurídica y con la tramitación de juicios por parte de estos colectivos ante la autoridad competente se ha logrado el respeto a la autonomía indígena en México en su faceta de elegir a sus autoridades mediante sistemas normativos internos.

El punto de partida del respeto al ejercicio de los derechos político-electorales radica en la percepción que dentro del sistema electoral tengan las autoridades involucradas de la diversidad cultural, siendo una herramienta fundamental el discurso intercultural que promuevan, por lo que se hacen las siguientes precisiones.

La interculturalidad como filosofía tiene como punto de partida el reconocimiento del derecho a vivir en un entorno de riqueza cultural, de conocimiento recíproco y respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. (Dietz, 2011: 33-56).

Hoy el término se ha vuelto complejo y polisémico, actualmente se usa para referir a las relaciones que existen dentro de la sociedad entre diversas constelaciones de mayoría-minoría, y que se definen no sólo en términos de cultura, sino también en términos de etnicidad, lengua, denominación religiosa y/o nacionalidad. (Dietz, 2011: 203)

En lo jurídico se presenta como un enfoque que genera una nueva forma de construcción del derecho en la que se respetan las diferencias culturales y los saberes diversos de los pueblos y comunidades, y que utiliza el diálogo para armonizar la vida en sociedad.

En consideración a lo anterior es posible plantear como parte de la política pública de una institución o dependencia pública o privada un discurso intercultural adecuado al contexto social, económico, cultural, jurídico o político.

Para efectos de este trabajo se considera resiliencia democrática la manera en que el INE y el TEPJF interpretan el respeto a las diferencias, los saberes diversos y las identidades de los pueblos originarios de México en materia electoral; lo que se refleja en sus estrategias, criterios y planes de trabajo.

El INE, desde la gestión electoral refiere a la interculturalidad como parte de los diez componentes que conforman su Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCIVICA) lanzada en dos mil diecisiete y utiliza el término, para indicar la interrelación entre grupos y personas con culturas distintas; que se sustenta normativamente en las formas del Estado multicultural, también implica que la relación entre grupos y personas con culturas distintas se da desde planos de igualdad, lo que a su vez involucra la aceptación de que todas las culturas, como todas las personas, son igualmente dignas y valiosas. (Instituto Nacional Electoral, 2016:15-20)

Cabe señalar que en coincidencia con lo planteado en la ENCIVICA previo al proceso electoral local del dos mil dieciocho, el IEPC promovió actividades con la ciudadanía en

general y en especial con los pueblos originarios relacionadas con el dialogo intercultural, como lo fueron foros académicos con expertos y de discusión acerca de los sistemas normativos de los pueblos originarios, los municipios indígenas, la paridad en materia electoral, los criterios de auto adscripción indígena y la libre determinación, basada en usos y costumbres en diferentes Estados.

En lo que respecta al TEPJF se advierte respeto a la cosmovisión y a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades originarias, en algunas sentencias de sus salas regionales y por supuesto de la Sala Superior que han generado tesis y jurisprudencias que han sentado las bases de lo que se ha denominado derecho electoral indígena.

Juzgar con perspectiva intercultural en materia electoral se convirtió en una exigencia a partir de la sentencia SUP-JDC-1011/2013 y acumulado que estableció el criterio que en los casos de derechos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, era necesario valorar las circunstancias en las que surgen, para definir claramente los límites de la controversia jurídica puesta a consideración de las autoridades electorales y resolverla desde una perspectiva intercultural, atendiendo tanto a los principios o valores constitucionales y convencionales, como a los valores y principios de la comunidad. ( Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017: 92).

La Sala Superior del TEPJF, como máxima autoridad reconoce la existencia de instituciones propias del derecho indígena, que requieren de entender su esencia, así como el contexto en el cual se desarrollan y considera que el imponer instituciones que resulten ajenas a un sistema normativo vigente en el pueblo o comunidad indígena de que se trate, ya sea que provenga del derecho legislado o de otros sistemas normativos indígenas no es apropiado.

También como parte de ese discurso intercultural el TEPJF ha diseñado guías, manuales y otros documentos con la intención de promover la defensa y la adecuada protección de los derechos políticos de la población indígena; tal es el caso de la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral Indígena.

Dicha guía fue elaborada con sugerencias construidas a partir de lo dispuesto en el artículo 2 de la constitución federal, tratados, convenciones y estándares internacionales,

opiniones de expertas y expertos en la materia, así como en los criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En dicho documento se subraya que la aplicación de cada regla depende del asunto concreto sometido a juicio y se estima que su observancia puede ofrecer mejores soluciones a este tipo de asuntos. ( Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017: 58)

Aunado a lo anterior, se deja en claro la intención de avanzar en el tema del acercamiento a las denominadas minorías representativas y se crea la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades indígenas como un órgano auxiliar de la Comisión de Administración del TEPJF, con independencia técnica y autonomía operativa, encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren.

Cabe destacar que la mencionada defensoría presta sus servicios de dos formas: asesoría electoral, mediante la orientación, guía o instrucción técnica sobre la naturaleza, contenido y alcances de los derechos político-electorales, establecidos en favor de los pueblos, comunidades indígenas o alguna de las personas que los integren y por medio de la defensa electoral, es decir la representación y/o defensa de los derechos político electorales ante las Salas del TEPJF.

El compromiso de las defensoras y los defensores en general es pugnar porque las autoridades rebasen las visiones formalistas y respondan, desde un lenguaje de derechos, a la falta de acceso de los indígenas a la justicia, entre otras cosas, exigiendo que se provea de lo necesario para que la persona o personas involucradas comprendan y se hagan comprender dentro del juicio, y que, además, sean consideradas sus condiciones, contextos y necesidades particulares.

En los últimos años el TEPJF promueve la justicia abierta como estrategia de cercanía a la ciudadanía y atención a las demandas sociales en materia electoral, por lo que en materia procesal electoral ha diseñado figuras Jurídicas como la suplencia de la queja para los pobladores indígenas.



De igual manera se autoriza tutela especial en aquellos medios de impugnación que lo permiten, de ordenar pruebas antropológicas para que sean los expertos quienes digan si en cada comunidad procede la implementación de la universalidad del sufragio o se está rompiendo el sistema normativo.

Finalmente la Sala Superior ha resuelto en diferentes asuntos que involucran al Consejo General del INE y a los pueblos originarios que dicho órgano de gestión electoral debe dar respuesta inmediata, como en el caso de la petición de un grupo de ciudadanos para instalar una casilla especial de votación, para los habitantes – al menos 246 indígenas tsotsiles - que se vieron obligados a desplazarse por hechos violentos que ocurrieron en mayo de 2016, quienes para salvaguardar su vida, desde febrero 2017 viven en un campamento.

Las tareas y estrategias antes descritas son en general buenas prácticas que pueden acercar a la ciudadanía y a las autoridades electorales; al parecer existe voluntad política de quienes intervienen en el proceso electoral, se advierte que entienden la interculturalidad y hacen esfuerzos de acercamiento a esos colectivos.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, no es suficiente con la existencia del marco jurídico de protección a los derechos político electorales de las comunidades indígenas, se requiere la materialización de todas las acciones positivas.

Tampoco debe perderse de vista que en cada proceso electoral surgen nuevas discusiones y actos de corrupción que involucran a los pueblos originarios, reflejando con ello la necesidad de resolver los problemas sociales de fondo, mismos que son detonados con las elecciones y que escapan a la materia estrictamente electoral.

Lo antes descrito genera confianza en que la autoridad judicial electoral entiende la interculturalidad y hace esfuerzos de acercamiento a esos colectivos, pero, queda mucho camino por recorrer y cada proceso electoral surgen nuevas discusiones y actos de corrupción que involucran a los pueblos originarios, reflejando con ello la necesidad de resolver los problemas de fondo que son detonados con las elecciones.

Por lo que considerando que es la propia ciudadanía de cada pueblo o comunidad la que conoce en realidad los desafíos locales; incorporar no solo como defensoras y defensoras

en los tribunales a personas de origen indígena sino dentro de los Tribunales como secretarios de acuerdos, proyectistas y a futuro como magistradas y magistrados electorales una buena alternativa de acercamiento y de participación jurídico política que debe incluirse en la política pública de justicia electoral abierta en escenarios de diversidad cultural.

Para corolario de lo anterior de manera breve se hace una descripción de la jornada electoral local del uno de julio del dos mil dieciocho en Chiapas y de algunas situaciones que surgieron en municipios con población indígena que provocaron toma decisiones trascendentales en materia electoral por parte del IEPC como son: el hecho de denunciar la comisión de delitos electorales ante la autoridad competente o dejar de validar la elección municipal.

Entre las complejidades que se presentaron en la jornada electoral en los municipios con población indígena se destaca la comisión de hechos delictivos. De acuerdo a la información de la página oficial del IEPC, se hizo del conocimiento público que se realizaron treinta y tres imputaciones ante la Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas (FIEECH) y seis ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), derivadas del robo con violencia de boletas electorales, robo de paquetes electorales, daños a los inmuebles de consejos electorales, presunta compra y coacción del voto, así como impresión ilegal de boletas, el impedimento de instalación de algunas casillas, obstaculizar el desarrollo del escrutinio y cómputo y las tareas de los funcionarios electorales, entre otros.

El arbitro electoral preciso que dichos hechos se suscitaron en los municipios de Tapilula, Chicoasen, Huixtán, San Andrés Duraznal, Ángel Albino Corzo, Jitotol, Simojovel, Tumbalá, Bochil, Las Margaritas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Huitiupán, Tila, Frontera Comalapa, Santiago El Pinar, Solosuchiapa, Suchiate, Chanal, Tenejapa, Mazatán, Chalchihuitán, Maravilla Tenejapa y Catazajá; mismos que se ubican en distritos electorales considerados con presencia de población indígena.

Con posterioridad el IEPC informó que después de las sesiones de cómputo, celebradas a partir del cuatro de julio del dos mil dieciocho, en sesenta y siete de los ciento veintidos municipios del Estado fueron impugnadas las elecciones municipales y que en los consejos municipales electorales de Chicoasen, San Andrés Duraznal y Tapilula no se dieron

las condiciones para determinar la validez de la elección, debido a razonamientos derivados de los conatos de violencia que se manifestaron en esos lugares.

Cabe señalar que los tres municipios en los que no hubo condiciones de validar la elección tienen presencia de pueblos originarios, por lo que resulta importante referir como se integró cada consejo municipal electoral y los hechos ocurridos en la jornada electoral.

En el caso de Tapilula, el consejo municipal electoral se integró por una presidenta, un secretario técnico, dos consejeros y dos consejeras, pero ninguno de sus integrantes en su curriculum oficial acredita habilidades y competencias relacionadas con la interculturalidad, requisito indispensable dado que el municipio cuenta con hablantes de zoque y tzotzil y pertenece al distrito electoral número 11 con cabecera en Bochil, Chiapas, considera como Distrito de mayoría indígena.

En lo que respecta al municipio de San Andrés Duraznal, los integrantes del consejo, fueron un presidente, una secretaria técnica, tres consejeras y un consejero, al igual que el anterior tampoco de los datos curriculares que los funcionarios y funcionarias, presentaron al IEPC se acreditaron habilidades y competencias de carácter intercultural, siendo esto trascendente en atención a que se considera municipio de mayoría indígena, la población predominante es de origen tzotzil y forma parte del distrito electoral número 8 con cabecera en Simojovel, Chiapas, catalogado también como cien por ciento indígena.

Finalmente, en el municipio de Chicoasén, los Integrantes del consejo electoral fueron: un presidente, una consejera técnica, tres consejeras y un consejero, tampoco se acredita por parte de las y los funcionarios del órgano desconcentrado habilidades y competencias en materia intercultural, lo que resulta indispensable porque cuenta con hablantes de tzotzil y tojolabal; aun y cuando pertenece al distrito electoral número 2 con cabecera en la capital del Estado Tuxtla Gutiérrez.

Ahora bien, otra complejidad que se presentó durante la jornada electoral fue el hecho de que algunos consejos municipales solicitaron se habilitará en términos de ley una sede alterna por parte del consejo general del IEPC para llevar a cabo la sesión de computo a partir del día 4 de julio, dado que se temía por la seguridad de las y los funcionarios electorales y que personas inconformes destruyeran los paquetes electorales. Cuya máxima expresión fue precisamente la quema de las oficinas del consejo municipal de *Tapilula* y de *Chicoasén*.

Muchos de los conflictos ocurridos en el referido proceso electoral quizá pudieron evitarse con la participación de los pueblos originarios de Chiapas de manera directa y activa mediante representantes en los órganos de gestión electoral y en el TEPJF.

Las complejidades antes descritas son tan solo algunas de las que en la diversidad cultural de Chiapas aparecen en cada año electoral. Para la protección de los derechos políticos electorales en lo colectivo e individual; es necesario que el sistema electoral en lo general y el TEPJF en lo particular adopten estrategias de inclusión. Una alternativa es promover la representación de los diferentes pueblos y comunidades originarias en los órganos jurisdiccionales electorales competentes en distritos electorales de los denominados indígenas, con la intención de que al resolver se escuche la opinión de personas que pueden resultar afectadas de manera colateral con la resolución judicial.

#### **IV. Conclusiones**

En los sistemas democráticos, los formuladores de políticas, los académicos, la sociedad civil y el sector empresarial pueden ser la fuente para identificar cambios necesarios en el sistema y asegurar que se ejerza una mayor elasticidad de una manera que sea legítima y responda al sistema de gobierno democrático. El cambio y la reforma pueden ocurrir a través de reformas constitucionales. Sin embargo, es probable que los pasos incrementales a lo largo del tiempo en lugar de los cambios grandiosos produzcan resultados más óptimos para la resiliencia democrática.

Se considera resiliencia democrática la manera en que el INE y el TEPJF interpretan el respeto a las diferencias, los saberes diversos y las identidades de los pueblos originarios de México en materia electoral; lo que se refleja en sus estrategias, criterios y planes de trabajo.

El INE, desde la gestión electoral refiere a la interculturalidad como parte de los diez componentes que conforman su Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCIVICA) lanzada en dos mil diecisiete y utiliza el término, para indicar la interrelación entre grupos y personas con culturas distintas; que se sustenta normativamente en las formas del Estado multicultural,

también implica que la relación entre grupos y personas con culturas distintas se da desde planos de igualdad, lo que a su vez involucra la aceptación de que todas las culturas, como todas las personas, son igualmente dignas y valiosas. (Instituto Nacional Electoral, 2016:15-20)

Cabe señalar que en coincidencia con lo planteado en la ENCIVICA previo al proceso electoral local del dos mil dieciocho, el IEPC promovió actividades con la ciudadanía en general y en especial con los pueblos originarios relacionadas con el dialogo intercultural, como lo fueron foros académicos con expertos y de discusión acerca de los sistemas normativos de los pueblos originarios, los municipios indígenas, la paridad en materia electoral, los criterios de auto adscripción indígena y la libre determinación, basada en usos y costumbres en diferentes Estados.

En lo que respecta al TEPJF se advierte respeto a la cosmovisión y a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades originarias, en algunas sentencias de sus salas regionales y por supuesto de la Sala Superior que han generado tesis y jurisprudencias que han sentado las bases de lo que se ha denominado derecho electoral indígena.

## **V. Referencias**

- Bello López, Daniel. 2011. La costumbre jurídica y las formas de organización comunitaria en la Huasteca Media Veracruzana. México: Universidad Veracruzana y Universidad Veracruzana Intercultural.
- Cordero Avendaño de Durand, Carmen. 2009. Supervivencia de un derecho consuetudinario en el Valle de Tlacolula, México. México: Cámara de Diputados LX Legislatura-Porrúa.
- Dietz, Gunther y Mateos Cortés, Laura Selene. 2011. Educación Intercultural en México, un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos, México: Coordinación de educación intercultural y bilingüe de la Secretaria de Educación Pública.

- Fajardo Santana, Horacia. 2010. Resolución de conflictos en comunidades huicholas, en Alvarado Solís, Neyra Patricia (coord.), *Sistemas normativos indígenas huichol, cora, tepehuano y mexicano*. México: cdi.
- Gómez Muñoz, Maritza. 2004. *Tzeltales*, México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Instituto Nacional Electoral. 2016. *Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023*. México: INE.
- Korsbaek, Lief. 1996. *Introducción al Sistema de Cargos*. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2017. *Guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena*. México: TEPJF.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2017. *Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas*. México: TEPJF.